


OPINIÓN

RED COMPARTIDA
**ERICK VALENCIA SALAZAR, EL 85,
SERÁ UN GORRIÓN EN EU**

Si las cosas no tienen un cambio drástico en el mundo del narcotráfico y mientras en México ya hay varios personajes que pretenden disputar la sucesión de El Mencho; en EU, uno de los fundadores del CJNG, Erick Valencia Salazar, El 85, cambia su declaración a culpable por cargos de narcotráfico en Washington, obtendrá un acuerdo con la fiscalía y beneficios en su sentencia porque se supone que va a cooperar con las autoridades. La fecha es importante, el Comando Norte ya da por concluido el caso de la muerte de El Mencho, es un caso cerrado para EU y entonces la memoria de El 85 se resetea. El nuevo narcohablante llegó extraditado a Estados Unidos en febrero de 2024 y hasta ahora se declara culpable, por cierto, El 85 fue atrapado en el 2022 en Tapalpa, igual que El Mencho y también por la Sedena. Se supone que hay otro narco que va a cantar en EU: Abigael González Valencia, El Cuini, que fue detenido por la Semar en febrero de 2015, en Puerto Vallarta. Lo que se sabe es que su grupo, llamado Los Cuinis, era parte del CJNG, pero estaba más enfocado a lavado de dinero y operaciones financieras, y él estaría buscando un acuerdo con la autoridad antes de que haya un nuevo jefe en México.

No es que uno sea mal pensado, pero que la administración de la alcaldesa Juana Carrillo Luna en Cuautitlán se encuentre hoy en medio de una investigación por la adjudicación de contratos que superan los 15 millones de pesos a una empresa que se dedica a hacer eventos como es Creatif Atelier y sea por conciertos puede hacer que uno piense mal. La gente de la alcaldesa dice que es parte de la agenda cultural y no tiene nada que ver con una presunta red de tráfico de influencias que involucra a César Reyna, su hijo, y otros personajes que se involucran con esta empresa. Nos dicen que Creatif Atelier es más una empresa fachada y sus operador detrás de estas contrataciones es Cybolt Managed Services, que se dice está vinculada a Diego Hildebrando Zavala, hermano de la diputada Margarita Zavala y cuñado del expresidente Felipe Calderón, ha sido una figura señalada desde 2006 por obtener contratos gubernamentales mediante el influyentismo. Esta alianza sugiere un entramado donde la política local de Cuautitlán que sirve para alimentar intereses de grupos económicos. Por cierto, César Reyna fue administrador de las aduanas bajo el mando de Horacio Duarte Olivares.

El Plan B de la presidenta después de la reforma electoral no se esperaba en lo económico. Y es que nos dicen que una vez que no se pudo ver el tema de los plurinominales y el recorte de gastos con OPLES y partidos políticos, vía INE, pues veamos los toques máximos de los congresos de los estados. Nos comentan que es en los estados donde PT y PVEM también van a perder, por lo cual, quie-

ren ver de qué manera se pueden ir frenando los cambios, ya que es en las entidades donde tienen un peso específico por encima de grandes cargos, como gobernadores. ¿Castigo? Nadie lo ve así según nos informan, pero los únicos que salen casi casi a mano, son los integrantes de oposición.

¿En qué momento le dijeron a la alcaldesa Abelina López que era candidata a la gubernatura de Guerrero? Nos comentan que la verdadera lucha se encuentra entre Félix Salgado y Beatriz Mojica, que ambos tienen años deseando el milagrito. De hecho, nos confían que Abelina, la alcaldesa que la Suprema Corte salvó de una investigación por un dinerito presuntamente desviado, ya le ha dicho a sus cercanos que ella será la gobernadora y, en broma o muy en serio, hasta diciendo quién va a qué dependencia.

En Oaxaca, por tercer año consecutivo el gobernador Salomón Jara anuncia una inversión histórica en Seguridad Pública, con 712 millones 273 mil pesos integrados por una inversión federal de 312 millones 273 mil pesos y una inversión estatal de 399 millones. Este presupuesto se utilizará en 65 patrullas, 81 motopatrullas, 8 mil 25 uniformes, 2 mil 20 cámaras y 430 Armas de fuego, equipamiento con el que se fortalecerá el trabajo de seguridad de municipios, seguridad estatal, la procuración de justicia, el Secretariado Ejecutivo, atención a víctimas entre otras áreas.

PD: Ramón Amieva Gálvez, magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, decidió hacer privadas sus redes sociales ¿No se supone que los funcionarios públicos no pueden hacer eso?